

“LA ESTRATEGIA DE GUERRA EN CHIAPAS”

Onésimo Hidalgo y Gustavo Castro

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC).

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, junio de 1998.

El huevo o la gallina. Si se rompió la tregua o no entre el EZLN y el gobierno federal es un centro de discusión actual. Quizás esta no sea la pregunta central; más bien, si tal tregua existió algún día. En un sentido amplio de la “guerra” podríamos afirmar que no se trata tan solo de la eliminación física del enemigo por medio de la fuerza y las balas, sino también de la muerte de la esperanza, del corazón, de la cultura que revitaliza la vida indígena, de la eutanasia social lenta y paulatina por medio de los cercos de hambre, el terror y el miedo que paraliza, que mantiene a la población indígena en un estado social vegetativo. Estas son las acciones que se encaminan a desplazar a la población, alejarlas de sus medios de sobrevivencia y producción, de empujarlos a las montañas para que el frío, las enfermedades, la desnutrición y la tristeza hagan presa del corazón indígena; de robar sus tiendas, quemar sus milpas, usar sus cocinas como letrinas, de profanar sus cementerios, de prohibirles la libertad de tránsito y de culto al cerrar sus templos y su oración, de posesionarse de las tomas de agua. Esta es la guerra, esta es la estrategia de guerra que se ha implementado desde un principio, incluso mientras había diálogo, esta es la supuesta tregua quebrantada por el silencio de los indígenas.

La escalada de violencia aumenta, los acontecimientos indican que efectivamente estamos en una “guerra integral”, donde se ataca por todos lados, en todos los frentes, desde los medios de comunicación, la cultura, la política, la psicología, la educación, la economía local, regional y familiar que elimina hasta el excedente inmediato de bienestar mínimo del indígena con el robo de su radio, televisión, ropa, enseres domésticos, etc. Por alguna razón el gobierno mexicano se niega a ratificar el Segundo Protocolo de los Convenios de Ginebra referente a los conflictos armados internos para así cortar las mangueras de agua de la comunidad Chavajeval en El Bosque y envenenar los alimentos según los pobladores.

La “**estrategia de guerra**” que definiera la CONAI el 7 de junio es otro tema que se debate ahora entre los principales actores sociales y políticos del país. Ante estos acontecimientos vemos que hay tres

ejes o ángulos desde donde se discute la legitimidad de las acciones del Ejecutivo implementados por el gobernador interino Roberto Albores:

1) La ley: los gobiernos federal y estatal manifiestan el total apego a la legalidad para “restablecer” el estado de derecho en Chiapas como el fundamento básico de su acción. Sin embargo, la implementación de la ley ha sido pretexto para la violación a los derechos humanos; se ha acompañado con supuestas ejecuciones de órdenes de aprehensión incluso pendientes de años atrás y que son ahora aplicadas en los momentos oportunos para el gobierno; van acompañadas de injusticias, represión y operativos policiacos-militares con un promedio de participación de alrededor de mil efectivos fuertemente armados; ha sido pretexto para imponer a las fuerzas priístas de la localidad; ha tenido saldo de muchos presos aunque posteriormente algunos sean liberados junto con 10 de los 26 indígenas miembros del grupo paramilitar “Los Chinchulines”, y de la liberación de Miguel Toporek quien intentara asesinar a la hermana del obispo Samuel Ruiz García en la Curia Diocesana de San Cristóbal en noviembre de 1997; es parcial en el sentido de que es aplicada solo contra aquello que amenaza al partido oficial; etcétera. Por tanto, los laberintos de la “legalidad” para justificar la “legitimidad” y la represión no nos da la lectura adecuada de la realidad, cuando dicha ley es fruto de una correlación de fuerzas que ha sido desfavorable para los pueblos indígenas toda vez que el prisma se ha impuesto en la orientación legal del estado.

2) Los discursos: el gobierno federal y estatal han desplegado una campaña impresionante en internet y los medios de comunicación apegados al sistema con el fin de difundir el discurso gubernamental y del presidente Zedillo que tiene las características de ser cínico, contradictorio y con un tono cada vez más beligerante. Con la masacre de los indígenas de El Bosque, indignan las frases que vertidas por el presidente Zedillo como “nunca masacraré a los indígenas”, que no se imponga la violencia “por la fuerza de la costumbre” y hay que frenarla “antes de que otros se vuelvan insensibles e incluso cínicos frente a su triste repetición”; el Secretario de Gobernación afirmó que “la vida de cualquier mexicano es valiosa”; el gobernador Albores dijo que “ya basta de incertidumbres y de impunidad”. Tampoco el discurso es la medida de la realidad chiapaneca.

3) Los hechos: los resultados de la “estrategia de guerra” por lo menos en lo que va del año hablan de un aumento de desplazados, muertos, viudas, huérfanos, heridos, presos, operativos policiacos-

militares, grupos paramilitares, campamentos militares y policiacos, municipios autónomos desmantelados, sobrevuelos, patrullajes, retenes, paupérrimas condiciones de salud, baja producción, división entre las comunidades, expulsión de extranjeros, ataques a la Diócesis, etc. Hemos hablado mucho sobre algunos de estos indicadores; más adelante hablaremos sobre otros indicadores del empobrecimiento de Chiapas a nivel económico, productivo, educación, salud, entre otros temas. Estos indicadores son la medida de la realidad.

Hagamos un recuento de los grupos paramilitares hasta el momento: “Paz y Justicia”, “Los Chinchulines”, “Máscara Roja”, “Alianza San Bartolomé de los Llanos”, “Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista” (MIRA), “Los Aguilares”, “Los Puñales”, “Los Tomates”, “Los Chentes”, el Frente Cívico de La Independencia y **los dos recientes: “Los Quintos”** en el municipio de Venustiano Carranza compuesto por al menos 70 paramilitares bien armados, y **“Los Plátanos”** de El Bosque compuesto por lo menos de 80 jóvenes priístas tzotziles entrenados por el ejército y cuerpos policiacos, según fuentes periodísticas y confirmadas por habitantes de Unión Progreso. Existen **cuatro grupos paramilitares que ya no han registrado acciones:** “Los Degolladores” en San Juan Chamula, “Tomás Muntzer” en Ocosingo, “Primera Fuerza” en Chenalhó y los “Tzintzines” en Yajalón. Por tanto, ahora suben a **24 municipios** de Chiapas donde tienen presencia: Ocosingo, Tila, Tumbalá, Berriozábal, Salto de Agua, Sabanilla, Yajalón, San Fernando, Chilón, Venustiano Carranza, La Independencia, Comitán, Altamirano, San Andrés, Oxchuc, Tenejapa, Chamula, Amatenango del Valle, Chanal, Palenque, Chamula, Las Margaritas, Bochil y El Bosque.

Hay **más grupos paramilitares de filiación priísta** que no se identifican con algún nombre, pero sí con personas en diversas comunidades **en por lo menos 20 municipios:** Simojovel, Mitontic, Huitiupán, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Chenalhó, Pantelhó, Tenejapa, Sitalá, Palenque, Amatenango de la Frontera, Las Margaritas, Tenejapa, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Chanal, Rayón, La Trinitaria, Tzimol y Socoltenango.

Haciendo un recuento de 1998, 9 son los municipios que cuentan ya con militares y policías instalados en las cabeceras municipales (Pantelhó, Chalchihuitán, Mitontic, Chenalhó, Cancuc, El Bosque, Tenejapa, Sitalá, Nicolás Ruiz); 5 municipios autónomos supuestamente desmantelados (San Juan de

la Libertad en El Bosque; Flores Magón en Taniperlas, Ocosingo; Tierra y Libertad en La Trinitaria; Nicolás Ruiz y “17 de Noviembre” en Altamirano).

¿A qué responde todo esto? Veamos ahora esta estrategia desde el punto de vista de las elecciones que vendrán próximamente en Chiapas. Los comicios podrían ser tan solo una alternativa para que el estado transite a la democracia y a la paz, o un detonante más de la descomposición social y política que se va agravando en el estado. Si el gobierno cierra nuevamente las puertas electorales, civiles, políticas, pacíficas y democráticas para Chiapas, estará nuevamente apostando a la guerra y la violencia.

El 4 de octubre de 1998 habrán elecciones en Chiapas para elegir los presidentes municipales de los 111 municipios del estado, así como al Congreso Local compuesto por 40 diputados que representan a 24 Distritos Electorales. De estos diputados 25 son del PRI actualmente, por lo que controlan el Congreso chiapaneco y encausan todas las iniciativas que fortalezcan la estrategia del presidente Zedillo y el gobernador Albores, como lo pretende hacer para echar con el proyecto de remunicipalización desde el escenario del Congreso como el legítimo espacio legal y “verdaderamente representativo” de los intereses del estado y sus fuerzas políticas y sociales.

En el escenario político-electoral, el gobierno federal intentará a toda costa recuperar el poder y control del estado en alto grado de ingobernabilidad, que le permita manejar con mayor facilidad su proyecto político y económico de inversión para Chiapas, **en sus dos ejes:**

1) **Los municipios:** Significa el control político y económico sobre el territorio. Por medio de ellos se destinan cuantiosos recursos que son manejados por los presidentes municipales. Hasta la fecha, el gobierno del estado no ha querido dar cuentas de las auditorías a los municipios que tienen sospecha de mal manejo de recursos que en su mayoría son gobernados por el PRI y acusados de repartir recursos exclusivos a organizaciones condicionales al gobierno y a los grupos paramilitares. Además, el control político municipal facilita la operación y coordinación de las acciones militares y policiacas en un municipio. En aquellos donde hay fuerte presencia de la oposición o son gobernados por ella, se han opuesto fuertemente al hostigamiento, patrullajes e instalación de los militares y policías. Los presidentes municipales priístas son la retaguardia del ejército y fuerzas públicas así como la correa de transmisión de la estrategia del gobierno federal para Chiapas.

2) **del Congreso Local:** Significa el control de las leyes y el desempeño del Ejecutivo Estatal. Desde este escenario, el presidente Zedillo como el gobernador Albores intentan modificar, aprovechando todavía la mayoría priísta, definir los cambios legislativos en materia de inversión, seguridad pública, presupuestos, remunicipalización, derechos y cultura indígena, procuración de justicia, etc. Por ello, el Congreso Local se vuelve hoy un escenario estratégico para la consolidación de la estrategia federal en el estado que tiene una agenda amplia por definir antes de que pueda modificar la correlación de fuerzas al interior. Por otro lado, han sido algunos diputados priístas que se les ha vinculado en el apoyo a los grupos paramilitares para fortalecer el poder local del priísmo.

¿Por qué algunas organizaciones campesinas, urbanas e indígenas rechazan el proceso electoral en algunas regiones de Chiapas? Entre otras cosas: 1) Falta de credibilidad en la equidad y transparencia del proceso electoral; 2) Falta de credibilidad en los partidos políticos de oposición y porque sus intereses no están representados las plataformas políticas; 3) La mala imagen de algunos líderes urbanos y campesinos que se han montado en los partidos políticos y se han alejado de sus bases, cayendo en corrupción, oportunismos y prebendas del estado; 4) Miedo a perder nuevamente a sus mejores cuadros en las contiendas electorales que al final se corrompen; 5) Incomprensión y/o desconfianza a que la solución a sus demandas ancestrales se puedan llevar por la vía político-electoral.

Para socavar a todo lo que se opone al régimen previo a las elecciones, el gobernador Roberto Albores ha implementado diversas acciones en los municipios:

Nicolás Ruiz: gobernado por el PRD, desplaza a las autoridades, encarcela a líderes y dirigentes, culpa a la Diócesis y catequistas, introduce al ejército y la policía de seguridad pública quienes roban comida, tiendas, casas, ropa, dinero, etc.

Ocosingo: lanza órdenes de aprehensión contra los líderes campesinos y miembros de las organizaciones indígenas que forman parte del gobierno del Consejo Municipal; con un operativo policiaco-militar desmantela el municipio autónomo “Flores Magón”, roba utensilios de cocina, animales domésticos, envía a la cárcel a 12 personas, desplaza a la población zapatista hacia la montaña, instala campamentos policiacos, se suspenden labores escolares y los paramilitares retoman el control de la comunidad. El partido oficial, ganaderos y comerciantes se ven favorecidos. Por otro lado,

hostigamiento e incursiones militares han recibido los municipios autónomos Che Guevara en Moisés Gandhi y el de Sibacjá.

Palenque: las incursiones y las amenazas del ejército en el Aguascalientes zapatista de Roberto Barrios continúa latentes. Después de que en semanas pasadas fuera asesinado un simpatizante del EZLN a machetazos por priístas, se presume la intencionalidad de la quema de una vivienda por presuntos priístas donde una niña murió y otras resultaron heridas. En el caso de las 140 familias desplazadas de Agua Blanca no han podido retornar y las amenazas de priístas armados continúa hasta la fecha.

Ixtapa: gobernado por el PRD, con fuerte presencia de la organización campesina CIOAC, el gobierno acusa al presidente municipal, Guillermo Hernández, de ser responsable del asesinato de 4 priístas en 1996, y junto con otros líderes locales los encarcela.

Jitotol: gobernado por el PRD, priístas comienzan a denunciar al alcalde municipal de abigeato, por lo que el gobierno lo señala de “subversivo” y de estar apoyando al EZLN; además los acusa de ser de una banda de abigeato.

Soyaló: el gobierno encarceló en días pasados al Síndico del ayuntamiento y miembro de la CIOAC.

Chenalhó, Pantelhó, Mitontic, Chalchihuitán, Cancuc: en el presente año, el ejército se instaló en las cabeceras municipales y penetra constantemente a las comunidades en busca de zapatistas.

Amatenango del Valle: gobernado por el PRD, a principios de junio las autoridades del ayuntamiento y la población denuncian la entrada de los militares y corporaciones policiacas con indicios de instalarse en el municipio y protestan por estas acciones. Al no permitirles su permanencia, aumentan sus patrullajes. Además de que estuvieron obligando al presidente municipal para que con recursos del Ayuntamiento la policía se mantuviera en la cabecera municipal, cosa que fue rechazada por las comunidades y el cabildo.

Tenejapa: con un operativo policiaco-militar con mil elementos fuertemente armados, con el pretexto de recuperar carros robados, penetran a distintas comunidades y desmantelan un supuesto campamento de entrenamiento militar zapatista con saldo de 30 detenidos, golpeados, heridos, robo de casas, bienes, animales domésticos, etc. (que resultó ser un centro artesanal de mujeres). Por fin, el gobierno logra posicionar a las fuerzas policiacas en la cabecera municipal.

Simojovel: fueron asesinados campesinos de la organización campesina CIOAC y el ejército y policía de seguridad pública salieron de sus cuarteles y mantienen patrullajes continuos pese a la oposición de la población.

El Bosque: gobernado por los zapatistas y bajo su control el edificio del ayuntamiento municipal constituyeron el municipio autónomo San Juan de la Libertad, con un operativo policiaco militar de mil 200 efectivos, el gobierno recupera el control para la minoría priísta; la acción tiene un saldo de por lo menos 8 muertos indígenas y 2 policías, así como heridos y aproximadamente 60 presos, además del robo de animales, ropa, casas, utensilios, dinero, documentos, etc.

Tila, Tumbalá y Sabanilla: de igual modo, el gobierno no aplica en estos municipios la ley ni impone el estado de derecho. Todavía el grupo paramilitar “Paz y Justicia” mantiene sitiada la región, tiene cerrados los templos católicos impidiendo la libertad de culto, cobra cuotas ilegales, mantiene retenes e impide el libre tránsito, se opone al retorno de desplazados, continúa amenazando y sus miembros mil veces denunciados siguen actuando en total impunidad. Los tres municipios han recibido las visitas del presidente Zedillo en el presente año prometiendo más apoyos financieros.

Chanal: después de la visita de los obispos de la Diócesis, el presidente Zedillo visita la cabecera municipal controlada por los priístas que mantienen clausurado el templo católico y no permiten la libertad de culto. Del mismo modo, en este año, el ejército y la policía se atrincheraron en la cabecera municipal.

Oxchuc: En varias ocasiones indígenas de 4 organizaciones, incluyendo al PRI, han tomado la presidencia municipal exigiendo la destitución del alcalde priísta por fraude y apoyo del ayuntamiento y del diputado priísta al grupo paramilitar MIRA; la policía de seguridad pública los ha desalojado con violencia.

Bochil: gobernado por el PRD, aparece el grupo armado “Los Tomates” de filiación priísta quienes en mayo cobraron una víctima. Campesinos y líderes de la CIOAC y del PRD temen por las 120 órdenes de aprehensión en su contra.

San Cristóbal de Las Casas: con un operativo policiaco-militar de más de mil efectivos en la colonia de “La Hormiga”, son enviados a la cárcel los líderes evangélicos que podrían haber sido candidatos de los indígenas para la contienda electoral. Hasta el momento, los líderes del CRIACH, OPEACH y

SCOPNUR -tres importantes organizaciones indígenas en el municipio y en la región- han sido encarcelados; así, dejan limpio el terreno para los “auténticos coletos” que han actuado como grupo de choque, que han vuelto a resurgir en dos organizaciones conocidas como Fundación “Gente de Paz” y “Ciudadanos Unidos por San Cristóbal”.

Chilón: gobernado por el PRD, en este año es instalado un nuevo campamento militar en la escuela de la comunidad de San Jerónimo Tulijá, zona de influencia del municipio autónomo zapatista “El Trabajo”. Por su lado, los 10 de los 26 presos del grupo paramilitar Los Chinchulines festejan su liberación ante la intervención prestada por el gobernador Albores y poder actuar previo a las elecciones en favor del PRI.

Yajalón: el primer municipio donde el gobierno hace la entrega de 2 patrullas equipadas y la construcción de 2 casetas de vigilancia policiaca en los últimos días. Al mismo tiempo, grupos de priístas solicitan la instalación de un campamento policiaco. A principios del año, la policía de seguridad pública desalojó violentamente 5 predios tomados por indígenas.

Venustiano Carranza: miembros de la Casa del Pueblo denuncian las incursiones policiacas y los intentos gubernamentales para ligarlos con grupos armados y así justificar otro operativo policiaco-militar donde los comuneros llevan muchos años en lucha frontal contra los caciques de la familia Orantes y los intereses de las familias más poderosas del municipio quienes han apoyado al grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos ligados a los diputados de extracción priísta. Los miembros de la Casa del Pueblo reclaman 500 personas despojadas de sus tierras, 34 muertos, 4 desaparecidos, centenares de detenidos, torturados, presos, amenazas e intimidaciones y el reciente desalojo de un predio a miembros de la organización campesina OCEZ.

Sitalá: gobernado por el PRD, es el municipio al que más se le castigó con la reducción presupuestaria del gobierno del estado. Al mismo tiempo, al inicio del año, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una incursión el año pasado para desarmar a la policía municipal.

Altamirano: gobernado por el PRD y con la influencia del municipio autónomo zapatista “17 de Noviembre”, el gobierno informa que más del 90% de sus integrantes se incorporan al PRI y dejan a un lado las filas zapatistas, mientras que autoridades del municipio rebelde desmienten las declaraciones afirmando que 56 comunidades forman parte de la rebeldía. Acusan al diputado priísta Juan Villafuerte

de estar fomentando la división y apoyar al grupo paramilitar MIRA, el mismo que entregara macanas de policía a algunos indígenas durante el desmantelamiento del municipio autónomo “Ricardo Flores Magón”, hecho que fue registrado en la prensa. Por otro lado la Contraloría del Estado presiona al municipio por la comprobación de fondos públicos o la amenaza de ser desaforados. Sin embargo, de los más de 80 municipios gobernados por el PRI y cuyo desvío de fondos ha sido denunciado, las autoridades gubernamentales no han hecho nada.

Las Margaritas: con un operativo policiaco-militar fuertemente armado son encarcelados más de 40 líderes zapatistas, con saldo de casas allanadas, heridos; robo de pertenencias, animales, dinero, cooperativas, medicinas, etc., el ejército y las fuerzas policiacas desmantelan la cabecera del municipio autónomo “Tierra y Libertad” y logran posicionarse e imponer a los priístas de la localidad. Mientras tanto, el día 6 de junio niegan los priístas la entrada de ayuda humanitaria de la caravana conformada por 300 estudiantes de diversas universidades.

LA REMUNICIPALIZACION

Después de que el Presidente Zedillo en su segunda visita a Chiapas invitara a acelerar la remunicipalización del estado, el gobernador interino Roberto Albores ya tenía una propuesta para la tercera visita del Presidente Zedillo, mismas que se han dado en menos de un mes. Así, Albores propone 33 nuevos municipios que afectarían a 11 de los actuales de la siguiente manera: 3 en Altamirano, 5 en Las Margaritas, 1 en Chenalhó, 3 en Chilón, 2 en La Independencia 13 en Ocosingo, 1 en Sabanilla, 1 entre Salto de Agua y Tumbalá, 1 en Simojovel y 2 en Tila. En total serían 1,441 localidades con un total de población de 343,110 habitantes que formarían parte de otros municipios, según la propuesta. Estos nuevos municipios abarcarían las Zonas Selva, Norte y Altos.

Con esta iniciativa, el presidente Zedillo intenta montarse sobre un proceso imposible de detener y que llevan a cabo las comunidades indígenas. Así, se sube a la propuesta e intenta conducirla, condicionarla, generar más condiciones a su favor, romper y desestabilizar el proceso zapatista. Por ejemplo: 1) propone el mismo número que tiene el EZLN para así negociar en los mismos términos; 2) solo en 3 de ellos coincide con las mismas cabeceras de los municipios autónomos zapatistas (Sibacá, Moisés

Gandhi, Amparo Aguatinta y Aldama) pero quizás no coincida con el mismo número de comunidades y población; 3) en algunas de las nuevas cabeceras municipales propuestas son ya grandes campamentos militares permanentes (San Quintín, El Limar, Guadalupe Tepeyac, Patihuitz), como lo están ya en otras cabeceras que controlan (Tenejapa, Chenalhó, Cancuc, Tila, Mitontic, Simojovel, Bochil, El Bosque, Palenque, Ocosingo, Altamirano, Pantelhó, etc.); 4) en otras son terreno controlado por grupos incondicionales al régimen y al partido oficial (Lacandonia, Pico de Oro, Nueva Morelia, Valle de Carranza, El Edén, Maravilla Tenejapa, Bajucú, Río Blanco, Tzaconejá); 5) otras más son controladas por grupos paramilitares o grupos priístas armados (El Limar, Petalcingo, Patihuitz, Moyos, El Edén); 6) propone tan solo un plazo de 8 días para que el EZLN se incorpore al proceso, tiempo que ya venció.

Los municipios autónomos reciben ataques por varios frentes acusados por el gobernador de “grupos radicales y agitadores”: el desmantelamiento, la represión y la cárcel; el desplazamiento de la población y el cerco de hambre; más que la instalación del estado de derecho es la instalación del ejército, fuerzas policiacas y del priísmo local; una contrapropuesta que “sí es legal” poniendo condiciones y estructura; división en las comunidades; coptando líderes y rompiendo las lealtades; fuertes acciones publicitarias para inventar deserciones, hacerlas más evidentes o magnificarlas; amenazas, intimidaciones y terror; o facilitando a los grupos afines al régimen retomar el control político y territorial para luego devolverlo al gobierno.

La estrategia gubernamental está cargada de errores y presenta varias características: a) la represión y el uso a conveniencia del “imperio de la ley” no podrán poner “orden” ni restaurar el “estado de derecho” en medio de la ingobernabilidad mal gobernada por la política del presidente Zedillo durante 4 años; b) la estrategia del gobierno federal y estatal no gozan del consenso de los diversos sectores del país que, incluso muchos empresarios, han rechazado las acciones que se llevan a cabo para supuestamente pacificar Chiapas; c) las organizaciones campesinas, indígenas, urbanas y la sociedad civil en general van acumulando más que “pacificación”, muertos, desplazados, militarización y rabia; d) la estrategia gubernamental se va convirtiendo en una olla de presión cuya salida puede ser catastrófica o conducir sus energías para lograr nuevos caminos de paz; e) la factura de la ingobernabilidad se le quiere cobrar a toda fuerza política opuesta al régimen y al priísmo; f) se pretende ocultar la cara del ejército que

gobierna el estado con un supuesto “estado de derecho”; g) el régimen se resiste al diálogo, a la tolerancia, a la alternancia del poder mostrando una especie de fascismo cínico.

Con esta “estrategia de guerra” como diría la CONAI, la administración del presidente Zedillo ha perdido a su interlocutor por medio de su acorralamiento (al EZLN), ha perdido el puente que lo comunica con él (la CONAI), ha perdido el sustento legal y la participación institucional de los partidos de oposición al debilitar a la coadyuvancia (la COCOPA), y ha perdido el consenso de los indígenas y la sociedad civil mexicana.

Hasta ahora el gobierno federal y estatal han mostrado una cara sumamente cínica ante el conflicto. Niega rotundamente lo que la población chiapaneca, nacional e internacional está viendo con sus propios ojos, como testigos de una realidad lacerante. La represión, los presos, los heridos, los desplazados, los desalojados, los muertos, tienen rostro. Con la disolución de la CONAI volveremos a ver la negación sistemática y rotunda del régimen sobre las causas profundas de dicha disolución para crear mayor confusión.

Con la disolución de la CONAI podremos vislumbrar dos escenarios extremos: o el gobierno federal entiende que debe encauzar de otro modo y por los hechos la solución del conflicto; o continúa con su misma estrategia que llevará a empeorar el escenario político, social y militar en Chiapas y otros puntos del país.

Con estas ofensivas policiaco-militares, estamos acudiendo a una expresión más del sistema de imposición del régimen priísta, con su cara más dura e inhumana. La estrategia de la ofensiva militar iniciada en febrero de 1995 para recuperar el territorio controlado por el EZLN militarmente, de alguna manera fracasa porque el EZLN sigue controlando políticamente un territorio a través de sus bases de apoyo que resisten por medio de los municipios autónomos.

La etapa de la paramilitarización empieza a tener cierto rechazo en algunos lugares por gente del PRI, el ejemplo más claro fue en El Bosque, donde los priístas se unieron a los zapatistas para repeler la agresión del ejército, donde resultó una señora muerta militante del PRI y la mayoría de los detenidos pertenecen a ese partido.

Un caso semejante sucede en Chenalhó, donde 5 comunidades priístas se han retirado del PRI para afiliarse a la organización de Las Abejas, porque no quieren ni piensan seguir llevando a cabo la

violencia contra sus propios hermanos. Parece ser que el modelo paramilitar va dejando de ser efectivo y se va agotando en la medida que los acontecimientos van demostrando el involucramiento de las estructuras del gobierno y autoridades en la paramilitarización. Ante esto, el recurso que le queda al gobierno es usar como punta de lanza la policía de seguridad pública, judiciales y como refuerzo al ejército que actúa contra las comunidades civiles y desarmadas. Sin embargo, el hecho de que los zapatistas aparecieran armados y con uniformes en Chavajeval, es un anuncio para el gobierno como tiene preparado responderle, cosa que obligará al gobierno a afinar su estrategia o darle un giro.